

Robo de cables del tendido eléctrico en la Región

El robo de cables de electricidad y de telecomunicaciones es un delito que afecta a varias ciudades y zonas rurales, pero especialmente a los clientes que ven interrumpidas sus comunicaciones y el suministro de energía.

Hace unos días la PDI detuvo en Talcahuano a la dueña de un local comercial ubicado en Jaime Repullo por el delito de receptación e incautó más de 1.300 kilos de cable de cobre, avaluado en 15 millones de pesos. Los efectivos policiales encontraron en el galpón sacos con alambres de cobre y la encargada no contaba con documentos que acreditaran la procedencia del material. La fiscalización se realizó debido al incremento que ha tenido el robo del tendido eléctrico en esa comuna. Asimismo, la Municipalidad de Penco presentó una querrela criminal ante el Juzgado de Garantía de Concepción contra quienes resulten responsables del hurto de cables eléctricos, tras la sustracción de más de 3.000 metros de cable de cobre en la Ruta By Pass que conecta la Ruta del Itata con el acceso al Puerto de Lirquén.

La distribuidora CGE ha informado que este año se registran 230 robos de redes conductoras de baja tensión, afectando a cerca de 9 mil clientes, por los cortes de suministro eléctrico. Muchos de estos hurtos también se registran en zonas rurales apartadas donde no hay cámaras de vigilancia. Durante el año 2024, la distribuidora eléctrica registró 744 robos de redese en las regiones del Biobío y Ñuble, contabilizando 225 kilómetros de líneas. En 2023, la compañía registró cerca de 1.200 eventos con 196 kilómetros de cable. Si bien se redujeron los episodios en número, hubo un aumento de 14% en la cantidad de redes sustraídas y se afectó el suministro de 272 mil clientes. La provincia de Arauco también tuvo varios episodios de estos ilícitos el año pasado, y asimismo hubo robos que afectaron al tramo Charrúa-Chillán, con más de 11 kilómetros de cable.

El robo de alambres conductores ha tenido un aumento exponen-

Durante el año 2024, la distribuidora eléctrica CGE registró 744 robos de cable de redes en las regiones del Biobío y Ñuble, contabilizando 225 kilómetros de líneas sustraídas por bandas delictuales.

cial en los últimos años y es necesario que las autoridades refuercen medidas ante un delito que ha cambiado su comportamiento y se ha hecho más violento. Si bien se realizan las denuncias respectivas, es necesario perseguir y desarticular a estas bandas, ya que su accionar afecta directamente a miles de familias a lo largo del país. Los delitos se han vuelto más violentos y recurrentes, con bandas organizadas que usan equipamiento como camiones, camionetas y otros vehículos, y también están armados, atacando puntos de manera recurrente.

Este es un delito que carece muchas veces de evidencia y que se comete sobre todo en sectores rurales alejados, sin presencia policial y sin cámaras. El alto precio del cobre ha llevado al surgimiento de bandas organizadas que roban los cables de las redes, para venderlos en el mercado negro. Estas acciones vandálicas interrumpen los servicios, dejan incomunicados a hogares y empresas, y obligan a suspender la atención en servicios públicos de salud, educación, bancarios, semáforos o cajeros automáticos, lo que genera un impacto directo en la calidad de vida de las personas y el funcionamiento de las actividades.

Este ilícito se ha transformado en el nuevo negocio ilegal de las bandas de crimen organizado. En el caso de las redes de las compañías de telecomunicaciones, esto ocurre con mayor presencia en las zonas más vulnerables del país, que es precisamente donde las empresas telefónicas enfrentan el desafío de reducir la brecha digital. Se estima que participan bandas organizadas, que disponen de vehículos, escalas y herramientas para retirar las redes eléctricas o de telecomunicaciones, con el fin de vender en chatarrerías el cobre que contienen.

Cada vez que se interrumpe el suministro eléctrico, hay empresas que no pueden trabajar normalmente, los servicios públicos presentan problemas en el suministro, y los consumidores residenciales sufren la interrupción del servicio. En suma, el delito afecta la calidad de vida de las personas.